

COMUNICADO
21 de Octubre de 2010

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) como organización empresarial cúpula del sector de la construcción y de sus empresas auxiliares, junto con las principales asociaciones nacionales del sector de la obra pública a las que representa –SEOPAN, ANCI, AERCO, CEPCO- ante la próxima tramitación parlamentaria y aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011

MANIFIESTAN

- 1º.- Que la Actualización del Programa de Estabilidad de enero de 2010 constituyó un ajuste muy importante en la inversión en obra pública, que pasará de representar un 4,4% del PIB en 2009 a un 2,9% en 2013. Ello supone una disminución de la demanda esperada por el sector de obra civil próxima a los 23.300 millones de euros constantes de 2009.
- 2º.- En el pasado mes de mayo, la inversión pública se vio sometida a otro ajuste adicional superior a los 7.000 millones de euros. Ante la indisponibilidad de los créditos necesarios, el Ministerio de Fomento ha procedido a resolver contratos de obra pública en ejecución y a reprogramar las anualidades de otros, aplazando los compromisos de pago a ejercicios posteriores a 2013, resoluciones que deben ser atendidas en todos los extremos que impone la ley. Ambos ajustes suponen la práctica paralización del sector de la obra pública durante los dos próximos años.
- 3º.- Al mismo tiempo se ha llegado a la discusión del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011 (PPGE-2011) sin que las disposiciones de los Presupuestos 2010 sobre autopistas de peaje y autovías de primera generación se hayan hecho efectivas, generando una crisis de confianza y de tesorería en las empresas afectadas.
- 4º.- Por su parte, el PPGE-2011 consolida los ajustes en la inversión en obra pública y, ante la gravedad de este hecho, los abajo firmantes consideran necesario hacer llegar al Gobierno, y a todos los parlamentarios responsables de analizar el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011 las consecuencias de esta situación:
 - a) La reducción de la inversión estatal en obra pública, en una magnitud sin precedentes como la que contiene el PPGE-2011, produciría unos efectos dramáticos no sólo en el sector de la construcción sino también en la situación económica general del país. La necesaria consolidación fiscal, a fin de obtener el equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo económico, debería llevarse a cabo mediante la reducción del *gasto no productivo* y no a expensas de la inversión pública. La inversión en infraestructuras constituye el principal estabilizador económico que, en estos momentos, debería incrementarse como medida de reactivación de la actividad económica y el empleo.

- b) Prueba de ello es que si por cada millón de euros invertidos en obra pública se generan 13 empleos directos y 6 indirectos, cabe estimar que debido a los ajustes precedentes, que se consolidan en el PPGE-2011, supondrá la desaparición de 660.000 empleos en el medio plazo. La reducción de la inversión pública en obra civil inducirá, además, una reducción del PIB próxima al 1,8% durante los próximos años.
- c) Por otra parte y atendiendo al retorno fiscal que la inversión en obra pública tiene para el Estado, la medida de reducir ésta para contener el déficit público tendrá una eficacia muy limitada pues disminuirán los ingresos del Estado en una proporción muy relevante, teniendo en cuenta que por cada 100 millones invertidos por el Estado recupera 59 millones vía recaudación de impuestos, es decir que se financia en un 59% a corto plazo, porcentaje que se eleva al 80% si se tiene en cuenta el incremento inducido de actividad y empleo en el medio plazo. Teniendo en cuenta los costes e indemnizaciones inherentes a las resoluciones de contratos y reprogramación de anualidades, se estima que, del ahorro previsto por el Estado en el plan de ajuste realizado en la obra pública, sólo un 10% será finalmente ahorro efectivo.

Por todo ello las organizaciones firmantes:

- *Apelan* al criterio de todos los diputados individualmente y de los grupos parlamentarios para encontrar, en un clima de razonable consenso político, medidas que eviten este ajuste dramático de la inversión pública que, en caso contrario, tendrá efectos muy negativos sobre la actividad y el empleo, en el corto plazo, y sobre la productividad y, en definitiva, sobre el bienestar de los ciudadanos en el medio plazo.

Juan Lazcano Acedo
Presidente CNC

David Taguas Coejo
Presidente SEOPAN

Javier Saenz Cosculluela
Presidente AERCO

Jaime Lamo de Espinosa
Presidente ANCI

Rafael Fernández Sánchez
Presidente CEPCO